PANDEMIA: LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA

Jorge Igor OJEDA MARTÍNEZ*

SUMARIO: Introducción; I. La Libertad; II. La Audiencia Inicial; III. El Régimen Cautelar; IV. El derecho humano a la salud y la prisión preventiva justificada; Conclusiones; Fuentes consultadas.

Resumen

El debate de la medida cautelar de prisión preventiva justificada en tiempos de pandemia se tornó novedoso ante el argumento de evitación en su imposición al priorizar el derecho humano a la salud del imputado. La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han emitido diversas recomendaciones útiles para fundamentar la decisión de los Jueces y Juezas del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Abstract

The debate on the precautionary measure of justified preventive detention in times of pandemic became novel in view of the avoidance argument in its imposition by prioritizing the human right to health of the accused. The Commission and the Inter-American Court of Human Rights have issued various useful recommendations to support the decision of the Judges of the Accusatory Criminal Procedure System of the Superior Court of Justice of Mexico City.

Palabras Clave

Pandemia, Audiencia Inicial, Medida Cautelar, Prisión Preventiva Justificada, Derechos Humanos, COVID-19.

Introducción

El 31 de diciembre de 2019 la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, provincia de Hubei, en China, notificó un conglomerado de casos causados por un nuevo coronavirus (COVID-19); esta información fue corroborada en redes sociales por la Organización Mundial de la Salud el cuatro de enero del presente año;

* Licenciatura en *Derecho* por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha ocupado los siguientes cargos en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México: Mecnógrafo, Supervisor de Teleinformática, Pasante de Derecho, Secretario Proyectista, Secretario de Acuerdos y Secretario Auxiliar Judicial. Actualmente es Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México.

posteriormente, el 11 de marzo, ante los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad, y tomando en consideración su gravedad, dicha autoridad sanitaria determinó que el virus conocido como COVID-19 se caracterizaba ya como una pandemia, siendo definida ésta como una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países, o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región¹.

Atendiendo a dicha emergencia sanitaria global, mediante Acuerdo 39-14/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México estableció como línea de fuerza para hacer frente a la propagación y evitar contagios derivados de la pandemia declarada, la necesidad de adoptar medidas tendentes a preservar la salud de niños, niñas y adolescentes, de las y los servidores públicos, de las y los justiciables, así como de la población en general, autorizándose en ese tenor el *Plan de Contingencia para el Poder Judicial de la Ciudad de México*, decretándose, de manera paralela o concomitante, no solo la suspensión de labores, sino también la suspensión de términos procesales a partir del 18 de marzo de 2020².

¹ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, *COVID-19: cronología de la actuación de la OMS*, disponible en: [<https://www.who.int/es/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19>], consultada en: 2020-07-23.

² PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Información disponible en

No obstante lo anterior, y por la trascendencia e importancia que conlleva la administración de justicia penal³, considerada además como una actividad esencial en dicha contingencia, en el referido Acuerdo se determinó también, entre otras cuestiones, que los Jueces y Juezas del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, debían quedar exceptuados respecto a la aludida suspensión, en tratándose de *Plazos Constitucionales*, en cuyo caso, se instruyó, tomar las acciones necesarias a efecto de que no se viera interrumpida la citada labor y se continuara prestando el servicio de manera regular.

[https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Acuerdo_39_14.pdf], consultada en: 2020-07-23.

³ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la resolución 1-2020, señaló lo siguiente: «Teniendo en cuenta que la Democracia y el Estado de Derecho son condiciones necesarias para lograr la vigencia y el respeto de los derechos humanos, y que la naturaleza jurídica de las limitaciones a dichos derechos puede tener impactos directos en los sistemas democráticos de los Estados, la Comisión reafirma el rol fundamental de la independencia y de la actuación de los poderes públicos y las instituciones de control, en particular de los poderes judiciales y legislativos, cuyo funcionamiento debe ser asegurado aún en contextos de pandemia».

En ese orden de ideas, fue que Jueces y Juezas de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio debieron atender todas y cada una de las solicitudes que, durante esta suspensión de labores, realizó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para resolver la situación jurídica de las personas puestas a su disposición por la comisión de un hecho que la ley señala como delito, que fueron detenidas en flagrancia o caso urgente, y cuyas investigaciones decidieron judicializar mediante requerimiento formal⁴.

Por otro lado, cabe destacar que para garantizar la protección no solo de las y los servidores públicos —entiéndase Policías Procesales, Ministerios Públicos, Asesores Jurídicos, Defensores, personal adscrito a las Unidades de Gestión Judicial y Jueces—, sino también de la población en general, se autorizó además, de forma plausible, sensata y responsable —aunque ya iniciada la suspensión de labores decretada

mediante Acuerdo 39-14/2020—, una dinámica distinta en cuanto a la ubicación de las partes procesales en la sala de audiencia, pues la persona investigada intervenía desde el centro de detención en el que fue puesto a disposición del Órgano Jurisdiccional, mientras que el Ministerio Público, el Asesor Jurídico y, en su caso la Víctima, ya no compartían sala ni con el Juez ni con el Defensor, en tanto que éste último permanecía en una sala distinta a la que le había sido asignada al Juez de control; dicho de otro modo, las audiencias se comenzaron a llevar mediante la realización de video llamadas, enlazando por este medio tres salas distintas y el centro de detención en el que permanecía el investigado.

«Jueces y Juezas de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio debieron atender todas y cada una de las solicitudes que, durante esta suspensión de labores, realizó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para resolver la situación jurídica de las personas puestas a su disposición por la comisión de un hecho que la ley señala como delito, que fueron detenidas en flagrancia o caso urgente, y cuyas investigaciones decidieron judicializar mediante requerimiento formal».

⁴ En el presente artículo solo abordaremos el estudio inherente a las detenciones en flagrancia y/o caso urgente; sin embargo, el trámite que se dio a las solicitudes de Órdenes de Aprehensión efectuadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México —regla general por la cual se puede restringir la libertad de una persona— también fueron atendidas bajo la misma dinámica que las solicitudes de Audiencia Inicial con detenido.

Ahora bien, en el multicitado Acuerdo, como ya se había señalado, entre otras acciones se determinó que con independencia de la suspensión de labores y plazos procesales —en cumplimiento además a lo señalado en el párrafo tercero del artículo 1 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*—, debían quedar exceptuados de dicha regla los Plazos Constitucionales contenidos en la Ley Suprema de la Nación, debiéndose atender todas y cada una de las peticiones de Audiencia Inicial —con detenido— que realizara la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Así pues, recordemos que el párrafo quinto del artículo 16 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* dispone que «ningún indiciado puede ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas», plazo en el que deberá ordenar su libertad o ponerlo a disposición de la autoridad judicial; por otra parte, el séptimo párrafo del aludido arábigo establece que en casos de urgencia o flagrancia, el Juez deberá, *inmediatamente*, ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.

En esa misma dirección, el primer párrafo del numeral 19 de la referida Carta Magna señala que *ninguna detención* ante autoridad judicial podrá exceder del *plazo de setenta y dos horas*, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición,

sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso.

En seguimiento a lo establecido en los dos párrafos precedentes, el artículo 308, párrafo primero, del *Código Nacional de Procedimientos Penales*, establece que *inmediatamente* después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez de control, se debe citar a la audiencia inicial en la que se realizará el *control de la detención* antes de que se proceda a la formulación de la imputación; de igual modo, el numeral 313 de la Ley Adjetiva Nacional dispone que será precisamente durante el trámite de la Audiencia Inicial, que el Juez de control debe cuestionar al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en ese momento, o bien, dentro del plazo de 72 o 144 horas.

Luego entonces, al armonizar el contenido de los arábigos 1, párrafo tercero⁵, 16, párrafos quinto y séptimo, y 19, párrafo primero, de la *Constitución Política de los Estados*

⁵ «...Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley...».

Unidos Mexicanos, conjuntamente con lo que disponen los ordinales 134, párrafo primero, fracción II⁶, 308, párrafo primero y 313 del *Código Nacional de Procedimientos Penales*, se advierte el deber que tienen los Jueces y Juezas de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio no solo para resolver sobre la detención de una persona, sino para determinar también respecto de la situación jurídica de quienes son puestos a su disposición, haciéndolo siempre —sin importar la declaratoria de emergencia de salud global— dentro los plazos constitucionales consagrados en la Ley Fundamental.

A continuación realizaremos un análisis de los diversos momentos que se suscitan durante el desarrollo de la Audiencia Inicial —con detenido—, para de ese modo poder arribar a la parte en la que el Ministerio Público y el Defensor se encuentran en condiciones de debatir, en presencia del Juez de control, lo relacionado con la imposición de la medida cautelar; concretizaremos nuestro estudio en la medida cautelar

⁶ **Artículo 134, Código Nacional de Procedimientos Penales.**

Deberes comunes de los jueces.

En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y magistrados, los siguientes...

II. Respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el procedimiento...

contenida en el numeral 155, fracción XIV, del *Código Nacional de Procedimientos Penales* a la luz de la emergencia sanitaria derivada de la declaratoria de pandemia realizada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de la presente anualidad.

I. La Libertad

Dentro de la gama de libertades contenidas en la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* están la de creencia, la de cátedra, la creativa, la de profesión, la de expresión, etcétera, sin embargo, una de las de mayor relevancia es la ambulatoria⁷, abordada en el párrafo segundo del artículo 14 de la Carta Magna, que a la letra establece: «...Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las

⁷ En el libro *El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha*, Miguel DE CERVANTES, utilizando al personaje central, escribe lo siguiente: «La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la vida ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres».

Leyes expedidas con anterioridad al hecho...».

«Este derecho humano de libertad ambulatoria, como algunos otros, no debe adjetivarse como absoluto, pues el propio numeral 16 de la Ley Fundamental, en su párrafo quinto, señala que “cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público”; del mismo modo el párrafo sexto de dicho artículo precisa que “sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención”».

Este derecho humano de libertad ambulatoria, como algunos otros, no debe adjetivarse como absoluto, pues el propio numeral 16 de la Ley Fundamental, en su párrafo quinto, señala que «cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público»; del mismo modo el párrafo sexto de dicho artículo precisa que «sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención».

Podemos concluir entonces aseverando, de manera firme y categórica, que dentro del ámbito legal de protección de la libertad personal se contempla también un régimen de excepción, conformado, entre otros, por las detenciones que ocurren en flagrancia y/o caso urgente⁸; del mismo modo, resulta

⁸ No debemos olvidar, como ya ha sido referido, que la Orden de Aprehensión es otro de los supuestos por los cuales se puede conculcar la libertad

necesario apuntar también que estas detenciones deben ejecutarse respetando el marco de legalidad que contempla no solo la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* sino el *Código Nacional de Procedimientos Penales*, y es precisamente ahí en donde la actividad del Juez de control encuentra su fundamento e importancia.

En esa línea de razonamiento, cuando una persona es detenida en flagrancia, nace la obligación en la persona que detiene de poner al detenido, sin demora, a disposición de la autoridad civil más cercana, y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público; por otro lado, cuando el Ministerio Público ordena la detención de un investigado por caso urgente, los oficiales de la policía que la ejecuten deberán presentar inmediatamente al investigado ante el Ministerio Público, quien procurará que el indiciado sea presentado sin demora ante el Juez de control.

Analicemos ahora lo que ocurre cuando la persona asegurada en flagrancia es puesta a disposición de la autoridad ministerial; en este supuesto el agente del Ministerio Público debe iniciar la investigación correspondiente, determinar si la detención del indiciado se ajustó a los

de una persona; acto que se encuentra regulado en el artículo 16, párrafo tercero, de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*.

supuestos legales contenidos en la Constitución y en el *Código Nacional de Procedimientos Penales*⁹, y pronunciarse en cuanto a la necesidad de retención del indiciado en sus oficinas¹⁰ —tópico que merece un estudio aparte en cuanto a sus alcances y consecuencias—, amén de que en el término improrrogable de 48 horas —el cual puede duplicarse en tratándose de los supuestos contenidos en la ley— deberá también decidir si los registros de investigación recabados con el auxilio de la policía y de peritos resultan suficientes para solicitar la Audiencia Inicial —con detenido—.

Continuando ubicados en este supuesto, pensemos que el agente del Ministerio Público determinó ejercer la acción penal en contra de una persona que fue detenida en

⁹ Tal y como lo señala el párrafo primero del artículo 149 del *Código Nacional de Procedimientos Penales* en los siguientes términos: «...En los casos de flagrancia, el Ministerio Público deberá examinar las condiciones en las que se realizó la detención inmediatamente después de que la persona sea puesta a su disposición. Si la detención no fue realizada conforme a lo previsto en la Constitución y en este Código, dispondrá la libertad inmediata de la persona y, en su caso, velará por la aplicación de las sanciones disciplinarias o penales que correspondan...».

¹⁰ Atendiendo a lo establecido en el párrafo segundo del ordinal 149 de la Ley Adjetiva Nacional.

flagrancia¹¹, solicitando a la Unidad de Gestión Judicial, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del numeral 308 de la Ley Adjetiva Nacional, no solo se fije fecha y hora, sino que además se realicen las citaciones que correspondan, para para la celebración de la Audiencia Inicial — con detenido—.

«... podemos señalar que a los Jueces y Juezas del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México les corresponde, en la Audiencia Inicial, como lo dispone la ley, realizar primeramente el control de la detención de la persona puesta a su disposición; así pues, deviene de especial trascendencia precisar cuáles son los temas que, en su caso, pueden ser tomados en consideración por el Órgano Jurisdiccional para ordenar la libertad de una persona al finalizar el contradictorio generado en esta primera fase de la audiencia».

¹¹ En este rubro se pone en consideración del lector el contenido de los numerales 211, penúltimo párrafo y 335, párrafo primero del *Código Nacional de Procedimientos Penales*.

II. La Audiencia Inicial

Una vez que el órgano de gestión administrativa realiza los trámites para atender la petición del agente del Ministerio Público, y encontrándonos ya en la sala asignada para la Audiencia Inicial —con detenido—, se debe dar cumplimiento entonces a lo dispuesto en los artículos 307 y 308 del *Código Nacional de Procedimientos Penales*; así pues, el Órgano Jurisdiccional deberá informar al investigado sus derechos constitucionales y legales —siempre y cuando no se le hubiesen informado con anterioridad—, realizará el control de la detención, dará el uso de la voz al agente del Ministerio Público para que formule la imputación, dará también oportunidad al imputado de declarar, resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares, y finalmente, definirá el plazo para el cierre de la investigación.

En este orden, podemos señalar que a los Jueces y Juezas del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México les corresponde, en la Audiencia Inicial, como lo dispone la ley, realizar primeramente el control de la detención de la persona puesta a su disposición; así pues, deviene de especial trascendencia precisar cuáles son los temas que, en su caso, pueden ser tomados en consideración por el Órgano Jurisdiccional para ordenar la libertad de una persona al finalizar el

contradictorio generado en esta primera fase de la audiencia.

Para tales efectos, de conformidad con lo que dispone el segundo párrafo del arábigo 308 del *Código Nacional de Procedimientos Penales*, son tres los tópicos a los cuales nos referiremos en este momento: el primero tiene que ver con las razones de la detención del investigado; el segundo se relaciona con el cumplimiento del plazo constitucional de retención; y el tercero está vinculado con los requisitos de procedibilidad que señala la ley para cada caso concreto.

En cuanto al primero de dichos temas, el agente del Ministerio Público deberá justificar ante el Juez de control que la detención de la persona que fue puesta a su disposición ocurrió en alguno de los supuestos de flagrancia —o bien, caso urgente— señalados en el numeral 16 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, en correlación además con lo que dispone el ordinal 146 del *Código Nacional de Procedimientos Penales* —otro de los temas que merece un estudio aparte lo es el relacionado con las hipótesis de flagrancia contempladas en la fracción II, inciso “b”, del numeral anteriormente señalado—.

Referente al cumplimiento del plazo constitucional de retención —segundo elemento—, debemos tener presente lo que al respecto dispone el párrafo quinto del artículo 16 de la Constitución, esto es, que ningún

indiciado puede ser retenido por el Ministerio Público por más de *cuarenta y ocho horas*, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponerse a disposición de la autoridad judicial.

Y finalmente, por lo que hace al requisito de procedibilidad, el Código Procesal Nacional señala que la investigación de los hechos que revistan características de un delito, puede iniciarse por denuncia, por querrela o por su equivalente, cuando la propia normatividad lo requiera; en este tenor, los numerales 221 y 225 del precitado ordenamiento legal definen los primeros dos conceptos —nos referimos a la denuncia y a la querrela—.

Es bajo el análisis de esta dinámica procesal en la Audiencia Inicial —con detenido—, y respetando además los principios contenidos en el Libro Primero, Título II, Capítulo I, del *Código Nacional de Procedimientos Penales*, que se retoman en el artículo 20, apartado A, de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, que si el Órgano Jurisdiccional estima que se reunieron todos y cada uno de los requisitos a que se hace alusión en los numerales 16, párrafo quinto, de la Ley Suprema de la Unión y 308, párrafo segundo, del *Código Nacional de Procedimientos Penales*, calificará de legal la detención del investigado —de lo contrario, evidentemente, tendrá que ordenar la libertad del indiciado, con las reservas de ley—.

Si lo sostenido en la parte final del párrafo anterior acontece, es decir, si el Juez de control califica de legal la detención, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 309, párrafo segundo, del Código Nacional, el agente del Ministerio Público estará en condiciones de formular imputación a la persona detenida, entendida dicha actividad como la comunicación que el Órgano Ministerial efectúa al investigado, en presencia del Juez, informándole que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito.

En este acto, personalísimo además, que está a cargo del agente del Ministerio Público —y que resulta de trascendental importancia durante la secuela procesal—, se le debe precisar al indiciado, de manera clara y precisa, el hecho por el cual se le investiga, la clasificación jurídica preliminar —la cual puede ser modificada hasta la etapa de juicio, en el alegato de clausura—, la fecha, el lugar y el modo de comisión, la forma de intervención, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Órgano Jurisdiccional sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la ley.

Formulada la imputación, como lo dispone el arábigo 312 del *Código Nacional de Procedimientos Penales*, el Juez de control le preguntará al imputado —calidad que desde una perspectiva personal se adquiere,

evidentemente, después de que se le formula la imputación— si la entiende y si es su deseo contestar al cargo; del mismo modo deberá ponerle en conocimiento que en caso de que decida guardar silencio, éste no podrá ser utilizado en su contra.

Seguidamente, el artículo 313 del *Código Nacional de Procedimientos Penales* señala que después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso; sin embargo, antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control debe dirigirse al imputado para explicarle los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud planteada por el Ministerio Público — que lo es la vinculación a proceso—.

En ese tenor, se le debe explicar claramente al imputado que la solicitud de vinculación a proceso efectuada por el Ministerio Público se puede resolver en esa misma audiencia, o bien, dentro del plazo de 72 o 144; así las cosas, y en el supuesto de que el imputado no se acoja al plazo constitucional, ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación a proceso,

exponiendo los datos de prueba¹² con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; posterior a dicho planteamiento, el Juez de control otorgará la oportunidad a la Defensa para que conteste la solicitud, y si se considera necesario se permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, se debe resolver la situación jurídica del imputado¹³.

A continuación abordaremos, de forma muy sencilla, el tema inherente al auto de vinculación a proceso, que es precisamente la determinación a través de la cual el Juez de control resuelve la situación jurídica del imputado; por tanto, resulta necesario recordar que el primer párrafo del numeral 19 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* señala que *ninguna detención* ante autoridad judicial podrá exceder del *plazo de setenta y dos horas*, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso.

El artículo 316 del *Código Nacional de Procedimientos Penales*

¹² Definición que se encuentra contenida en el numeral 261 del *Código Nacional de Procedimientos Penales*.

¹³ Dinámica que puede variar cuando el imputado, estando debidamente asistido por su Defensor, solicita que su situación jurídica se resuelva dentro del plazo de 72 o 144 horas.

establece claramente cuáles son los requisitos que deben satisfacerse para el dictado de un auto de vinculación a proceso: que se haya formulado la imputación —actividad personalísima que corresponde al agente del Ministerio Público—; que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar —lo cual deberá ocurrir después de que el investigado haya manifestado haber entendido la imputación y de que el Juez le haya hecho saber que en caso de contestar el cargo la información que proporcione podría ser utilizada en su contra—; que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público —analizados de conformidad con lo que señala el numeral 265 del *Código Nacional de Procedimientos Penales*— se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito —de las contenidas en los numerales 29 y 94 del Código Penal para la Ciudad de México—.

En este apartado es necesario realizar un breve paréntesis respecto a la explicación de la secuencia ordinaria de la Audiencia Inicial —con detenido—; lo anterior se considera así, pues el numeral 316 de la Ley Adjetiva Nacional —que es en el que se contienen los requisitos para

el dictado de la determinación señalada en el párrafo que antecede— precisa además que el auto de vinculación a proceso debe dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, aunque el Juez de control pueda otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público; luego entonces, de lo anterior se advierte la trascendencia e importancia que tiene este acto procesal nominado “formulación de imputación”, pues el hecho que ahí se publicite será el mismo por el cual no solo se dicte el auto de vinculación a proceso, sino también por el que se seguirá el proceso forzosamente y por el que se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento.

En seguimiento al análisis del auto de vinculación a proceso, y como garantía de certeza y seguridad jurídica, el numeral 317 del *Código Nacional de Procedimientos Penales* establece que esta determinación debe contener: los datos personales del imputado, los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo 316, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa —lo cual necesariamente tuvo que abordar claramente el agente del Ministerio Público al momento de formular la imputación—.

En resumen, hemos señalado ya los actos procesales que se llevan a cabo en la Audiencia Inicial —con detenido—, al menos hasta la emisión del auto de vinculación a proceso previsto en el artículo 19 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*; correspondería ahora entrar al análisis de los dos últimos tópicos respecto de los que, de manera ordinaria, debe pronunciarse el Juez de control en la referida audiencia, y que son: medidas cautelares y plazo para cierre de investigación.

Por cuestiones sólo de orden argumentativo, realizaremos en este apartado —para finalizar analizando lo inherente a la medida cautelar y el impacto que tuvo la pandemia en el contradictorio inherente a este tema— una breve puntualización de lo que al respecto dispone el artículo 321 del *Código Nacional de Procedimientos Penales*; este dispositivo señala que el Juez de control, antes de finalizar la audiencia, determinará previa propuesta de las partes el plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Al respecto, la única regla que debe atenderse se encuentra contenida en el precitado arábigo, el cual establece que el plazo señalado por el Juez de control, en cuanto al plazo para el cierre de la investigación complementaria, no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión, ni

de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo.

Cabe destacar también que el Código Procesal Penal Nacional señala que la investigación se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima, ofendido o el imputado, hubiese solicitado con justificación la prórroga pretendida antes de finalizar el plazo inicialmente concedido, pero siempre, siempre, deberán observarse y respetarse los límites máximos antes enunciados.

«... en cuanto a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, fue común que la Defensa, durante los primeros días de la pandemia, hiciera valer el argumento de que resultaba violatorio de derechos fundamentales, concretamente de la salud del indiciado, la imposición de la referida medida cautelar, pues el Órgano Jurisdiccional no podía ponerle en riesgo de contagio al ordenar su ingreso a un centro de reclusión».

III. El Régimen Cautelar

El siguiente aspecto que trataremos es el inherente a la solicitud e imposición de la medida cautelar —tema de suma importancia, pues es a través de este acto de autoridad que se puede afectar la esfera jurídica del gobernado—; no podemos dejar de mencionar, como bien sabemos, que el contradictorio en relación a este tópico puede ocurrir previo al dictado del auto de vinculación a proceso¹⁴.

Antes de abordar dicho tema, y para sentar las bases del estudio que efectuaremos en los párrafos siguientes en cuanto a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, fue común que la Defensa, durante los primeros días de la pandemia, hiciera valer el argumento de que resultaba violatorio de derechos fundamentales, concretamente de la salud del indiciado, la imposición de la referida medida cautelar, pues el Órgano Jurisdiccional no podía ponerle en riesgo de contagio al ordenar su ingreso a un centro de reclusión.

Bajo esa tesitura, comencemos ahora con el análisis, un poco más a fondo, del tópico ya varias veces aludido; la medida cautelar debe ser impuesta mediante resolución judicial —principio de jurisdiccionalidad— por el tiempo indispensable para

¹⁴ Tal y como se precisa en el numeral 154 del *Código Nacional de Procedimientos Penales*.

asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo —incluso de la comunidad—, o evitar la obstaculización del procedimiento — principios de instrumentalidad y temporalidad—.

En otro orden de ideas, diremos que es precisamente durante el desarrollo de la Audiencia Inicial — con detenido— que el Juez de control debe pronunciarse respecto a la procedencia o no de imponer alguna medida cautelar; existen dos momentos para que emita su determinación al respecto —y que ya quedaron debidamente establecidos—: el primero, cuando formulada la imputación, el investigado decida acogerse al término constitucional de 72 o ciento 144, y el segundo, cuando ya se le haya vinculado a proceso.

Enseguida enunciaremos cuáles son las medidas cautelares que contempla el numeral 155 del *Código Nacional de Procedimientos Penales*: la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que designe; la exhibición de una garantía económica; el embargo de bienes; la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a

institución determinada; la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares; la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; la separación inmediata del domicilio; la suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral; la colocación de localizadores electrónicos; el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o la prisión preventiva.

En este apartado, naturalmente, no podemos dejar de mencionar lo que respecto a la prisión preventiva oficiosa señala el párrafo segundo del artículo 19 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*:

El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos,

petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud¹⁵.

Resulta también importante precisar que el Juez de control, al momento de resolver sobre la imposición o no de la medida cautelar, debe atender a los denominados principios de proporcionalidad y de mínima

intervención, y que el *Código Nacional de Procedimientos Penales* acoge en el numeral 156, al señalar que el juzgador, para imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código —en este rubro opera el principio de instrumentalidad— debe ponderar los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando además el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares que advierta de cada persona, e incluso, si lo estima necesario, podrá utilizar el análisis de evaluación de riesgo realizado por la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional al Proceso.

En cuanto a las medidas cautelares, existen tres reglas que debemos tener presentes al intervenir en la Audiencia Inicial —con detenido—: en primer término, que el Juez de control no puede imponer una medida cautelar de mayor alcance o afectación a la solicitada —por tanto, en caso de que el Ministerio Público solicite la imposición de la contenida en la fracción XIV, y si el Juez de control advierte que ésta resulta desproporcionada, podrá imponer una menos lesiva o de menor alcance—; secundariamente, que el Ministerio Público es el único que puede solicitar la prisión preventiva —aspecto que resulta trascendental para nuestro análisis—; y la tercera, que dicha medida

¹⁵ Al día de hoy el Poder Legislativo ha sido omisión en realizar la reforma que corresponde al numeral 167 del *Código Nacional de Procedimientos Penales*; el artículo SEGUNDO TRANSITORIO de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve precisa lo siguiente: «...Para los efectos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 19, materia de este Decreto, el Congreso de la Unión, en un lapso de 90 días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, deberá realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19...».

cautelar no puede combinarse con otras —salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero—.

Es de suma importancia destacar que la determinación que emita el Juez de control respecto a la imposición de medidas cautelares debe contener, al menos, la imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma —esto genera información, en su caso, para solicitar con posterioridad la revisión de la medida cautelar por haber variado las condiciones por las cuales se impuso—; los lineamientos para la aplicación de la medida —información que resulta esencial en cuanto a verificar su cumplimiento por parte de la autoridad supervisora—, y la vigencia de la medida —principio de temporalidad—.

Otro de los aspectos que es necesario citar, es que las partes procesales, ya sea para la imposición de la medida cautelar, o bien para su revisión, no están limitados a invocar únicamente datos de prueba —de conformidad con lo que dispone el numeral 261 del *Código Nacional de Procedimientos Penales*¹⁶—, sino que

¹⁶ El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y

incluso, como la propia norma lo permite, están en posibilidad de ofrecer medios de prueba para que se emita la determinación que corresponde; así pues, el estándar probatorio que se requiere para imponer una medida cautelar debe ser suficiente, idóneo y pertinente, a grado tal que el juzgador tenga certeza absoluta de que, atendiendo a la circunstancias y condiciones en particular, se acredita debida y fehacientemente la *necesidad de cautela*.

Trataremos ahora de delimitar nuestro tema, y centrarlo en el análisis y estudio de la medida cautelar de prisión preventiva justificada prevista en la fracción XIV del *Código Nacional de Procedimientos Penales*; en primera instancia reiteraremos que es el agente del Ministerio Público el único facultado para solicitar del Juez de control la imposición de dicha medida cautelar, amén de que ésta solo se puede imponer por delito que merezca pena privativa de libertad.

La duración de la prisión preventiva, como lo dispone el artículo 20, apartado “B”, fracción IX, segundo párrafo, de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, en relación con lo normado por el numeral 265 del *Código Nacional de Procedimientos Penales*, no podrá

pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado.

exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado — en ningún supuesto se podrá imponer, como erróneamente se llega a solicitar, por todo el tiempo que dure el procedimiento—.

Las excepciones en cuanto al lugar en que deba cumplirse la medida cautelar de prisión preventiva también se encuentran contenidas en la propia Ley Adjetiva Nacional; el ordinal 166 dispone lo siguiente: «En el caso de que el imputado sea una persona mayor de setenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el Órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan...»; circunstancia similar ocurre cuando se trate de mujeres embarazadas o de madres durante la lactancia.

Las causas de procedencia en cuanto a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada se encuentran enunciadas no solo en la Constitución, sino también en el *Código Nacional de Procedimientos Penales*¹⁷, siendo éstas

las siguientes: cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso — siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexas en los términos del presente Código—.

Otro de los temas de relevancia, y que podría llevarnos a realizar un análisis en lo particular, es el tema relacionado con la *necesidad de cautela*; no olvidemos que la imposición de las medidas cautelares debe obedecer a un fin —siempre que no nos encontremos en alguno de los supuestos contenidos en los artículos 19, párrafo segundo, parte inicial, de la Ley Fundamental y 167, párrafo primero, de la Ley Adjetiva Nacional—, y éstos se encuentran restringidos a lo que dispone el numeral 153 del *Código Nacional de Procedimientos Penales*, de tal forma que si alguna de las partes advierte necesaria la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada —fuera de los supuestos multicitadamente referidos—, deberá no solo argumentar el motivo por el cual lo solicita, sino acreditar la necesidad de cautela contenida en los

¹⁷ Tal y como también acontece en el supuesto de la prisión preventiva oficiosa.

ordinales 168¹⁸, 169¹⁹ y 170²⁰ de la Ley Adjetiva Nacional.

¹⁸ **Artículo 168.** Peligro de sustracción del imputado

Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:

I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga;

II. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste;

III. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal;

IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o

V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales.

¹⁹ **Artículo 169.** Peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación

Para decidir acerca del peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, el Juez de control tomará en cuenta la circunstancia del hecho

IV. El derecho humano a la salud y la prisión preventiva justificada

Fue bajo esta estructura procesal que la pandemia nos sorprendió a todos, y a partir del 18 de marzo de la presente anualidad, durante el debate de la medida cautelar en la Audiencia Inicial —con detenido—, algunos Defensores, tanto públicos como privados, solicitaron al Juez de

imputado y los elementos aportados por el Ministerio Público para estimar como probable que, de recuperar su libertad, el imputado:

I. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba;

II. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos, o

III. Intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participan en la investigación.

²⁰ **Artículo 170.** Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad

La protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el Juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida.

control, ante la petición y justificación realizada por el agente del Ministerio Público respecto de la medida cautelar prevista en el artículo 155, fracción XIV, del *Código Nacional de Procedimientos Penales*, no se impusiera la prisión preventiva, pues de lo contrario se conculcaría el derecho humano a la salud del imputado ante el riesgo de contagiarse del COVID-19.

«Fue bajo esta estructura procesal que la pandemia nos sorprendió a todos, y a partir del 18 de marzo de la presente anualidad, durante el debate de la medida cautelar en la Audiencia Inicial —con detenido—, algunos Defensores, tanto públicos como privados, solicitaron al Juez de control, ante la petición y justificación realizada por el agente del Ministerio Público respecto de la medida cautelar prevista en el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se impusiera la prisión preventiva, pues de lo contrario se conculcaría el derecho humano a la salud del imputado ante el riesgo de contagiarse del COVID-19».

Al respecto cabe señalar que la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, en la resolución 1/2020²¹, estableció lo siguiente:

Recordando que al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia del COVID-19, los Estados de la región deben brindar y aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, tales como: personas mayores y personas de cualquier edad que tienen afecciones médicas preexistentes, personas privadas de libertad, mujeres, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana, niñas, niños y adolescentes, personas LGBTI, personas afro descendientes, personas con discapacidad, personas trabajadoras, y personas que viven en pobreza y pobreza extrema, especialmente personas trabajadoras informales y personas en situación de calle; así como en las defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales,

²¹ COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Pandemia y Derechos humanos de las Américas, Resolución 1/2020*, CIDH-OEA, Abril 2020, disponible en: [\[https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf\]](https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf), consultada en: 2020-07-23.

profesionales de la salud y periodistas.

Además la Comisión Interamericana, en la precitada resolución, concretamente en la recomendación 41, precisó que los Estados tendrían que adoptar las medidas necesarias para prevenir los contagios de COVID-19 de la población mayor en general y en particular de quienes se encuentren, entre otros, en centros de privación de libertad, adoptando para ello no solo las medidas de ayuda humanitaria sino además garantizarles la provisión de alimentos, agua y saneamiento —tal y como veremos más adelante, lo informó la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez—; recomendación que en ninguna parte dispone evitar la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la cual será determinada, evidentemente, solo cuando se acrediten los supuestos contenidos en la ley para tales efectos.

Del mismo modo, en la multicitada resolución se recomendó además, concretamente en cuanto a las personas privadas de la libertad, adecuar las condiciones de detención de las personas en esta condición, particularmente en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros del COVID-19, garantizando en particular que todas las unidades cuenten con atención

médica —tópicos que, en cuanto a su cumplimiento, también fueron abordados por la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, como se detallará en párrafos siguientes—.

«... en la multicitada resolución se recomendó además, concretamente en cuanto a las personas privadas de la libertad, adecuar las condiciones de detención de las personas en esta condición, particularmente en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros del COVID-19, garantizando en particular que todas las unidades cuenten con atención médica —tópicos que, en cuanto a su cumplimiento, también fueron abordados por la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México».

Por otro lado, la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, en la Declaración 1/20²², emitida el nueve de abril pasado —en el mismo tenor que la Comisión—, en cuanto a las personas privadas de la libertad, sostuvo lo siguiente: «Dado el alto impacto que el COVID-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad»; pero tampoco, en ningún momento recomienda, ni mínimamente sugiere, prescindir de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

En esa directriz, de conformidad con lo que se advierte del numeral 164 de la Ley Adjetiva Nacional, la supervisión y vigilancia de la medida cautelar de prisión preventiva corresponde a la Autoridad Penitenciaria —Subsecretaría del Sistema Penitenciario—, a la que la propia *Ley Nacional de Ejecución Penal*, en el artículo 3, fracción I, la define

como la autoridad administrativa que depende del Poder Ejecutivo Federal o de los poderes ejecutivos de las entidades federativas encargada de operar el Sistema Penitenciario, que a la vez es conceptualizado en la fracción XXIV de dicho precepto normativo como el conjunto de normas jurídicas y de instituciones del Estado que tiene por objeto la supervisión de la prisión preventiva y la ejecución de sanciones penales, así como de las medidas de seguridad derivadas de una sentencia, el cual está organizado sobre la base del respeto de los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, *la salud* y el deporte como medios para lograr la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.

Una vez establecido lo anterior, resulta importante destacar que dentro de los derechos de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario se encuentran los siguientes: recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por alguna circunstancia particular²³; «recibir asistencia médica preventiva

²² CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20*, Costa Rica 2020, disponible en [http://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/comunicado/declaracion_1_20_ESP.pdf], consultada en: 2020-07-23.

²³ Razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

y de tratamiento para el cuidado de la salud en unidades médicas y recibir alimentación adecuada para la protección de su salud;» derechos que de conformidad con lo que dispone el artículo 1, párrafo tercero, de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, le corresponde garantizar a la Autoridad Penitenciaria, como incluso lo señala el artículo 15, fracción I, de la *Ley Nacional de Ejecución Penal*²⁴.

En esta tesitura, en cumplimiento a las obligaciones antes señaladas, la Autoridad Penitenciaria, a través del Boletín 408²⁵, informó respecto de la realización de distintas acciones para proteger y atender a las personas privadas de la libertad desde el inicio de la epidemia por COVID-19, *haciéndolo siempre con respeto irrestricto a los derechos humanos*, lo cual ha hecho posible evitar una problemática mayor durante la emergencia sanitaria,

²⁴ Garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentren sujetas al régimen de custodia y vigilancia en un Centro Penitenciario.

²⁵ SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA PENITENCIARIO, *Gobierno de México contiene contagios de COVID-19 en Centros Penitenciarios con acciones coordinadas*, Julio 2020, México 2020, disponible en: [<https://penitenciario.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/gobierno-de-la-cdmx-contiene-contagios-de-covid-19-en-centros-penitenciarios-con-acciones-coordinadas>], consultada en; 2020-07-23.

aplicando además, al menos, 4,607 pruebas a personas de recién ingreso en los centros penitenciarios o que presentaban síntomas, de las cuales 73 resultaron positivas, es decir el 0.27% del total de la población; amén de lo anterior, se informó sobre la instalación de ocho carpas en seis reclusorios para la recuperación de las personas enfermas, y que para trasladar a un hospital a las personas privadas de la libertad que lo requieran, se contaba con siete ambulancias de alta especialidad, operadas por personal calificado y certificado, y se acondicionó el Hospital General Torre Médica Tepepan.

«... resulta importante destacar que dentro de los derechos de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario se encuentran los siguientes: recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por alguna circunstancia particular; «recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud en unidades médicas y recibir alimentación adecuada para la protección de su salud;» derechos que de conformidad con lo que dispone el artículo 1, párrafo tercero, de la CPEUM, le corresponde garantizar a la Autoridad Penitenciaria...».

A mayor abundamiento, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, mediante video conferencia de prensa, el 20 de abril del año en curso informó haber realizado labores de desinfección en los 13 centros penitenciarios capitalinos, que tres veces al día se llevan a cabo labores de limpieza con agua clorada —en muros, pasillos, baños, vehículos, áreas de ingreso, hospitales, oficinas, dormitorios y áreas comunes—, que especialistas en desinfección efectúan labores que abarcan edificios de gobierno, auditorios, patios, gimnasios, áreas deportivas, de convivencia y de visita, así como aduanas y vehículos; precisado también que en todos los centros de reclusión se encontraba garantizado el suministro de insumos de aseo personal, el agua potable, así como el acceso a una alimentación digna, y destacando, *que por encima de todo estaba la vida y la salud de los internos*²⁶.

Conclusiones

Ante este panorama, y tomando en consideración no solo el marco jurídico ampliamente referido a lo largo del presente trabajo, sino también las diversas recomendaciones que emitieron la Comisión y la Corte Interamericana

de Derechos Humanos, el argumento de no imponer la prisión preventiva justificada por conculcar el derecho humano a la salud de los imputados ante el peligro de contagio del COVID-19, no obstante se haya acreditado alguno de los supuestos de procedencia en cuanto a la citada medida cautelar, resulta infundado.

Luego entonces, si se encuentra demostrado que en caso de no imponer la medida cautelar antes señalada —aun en estos tiempos de emergencia sanitaria global— la buena marcha del procedimiento —entiéndase por buena marcha las finalidades contenidas en el artículo 153 del *Código Nacional de Procedimientos Penales*— está en peligro, o bien, nos encontremos en alguno de los supuestos contenidos en los artículos 19, párrafo segundo, parte inicial, de la Ley Fundamental y 167, párrafo primero, de la Ley Adjetiva Nacional, el Juez de control se encontrará legitimado para atender a la petición que realiza el agente del Ministerio Público en cuanto a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Es preciso puntualizar que este acto de autoridad se justificara solo en caso de que se acredite a cabalidad —y me refiero a que sea de manera insoslayable, indubitable o innegable— alguno de los supuestos establecidos en el párrafo inmediato que antecede, pues solo de esta forma se garantizará, en cada caso, y partiendo de un ejercicio de

²⁶ Información disponible en: https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=5oTP8QSZGEI&feature=emb_logo, consultada en: 2020-07-23.

valoración objetivo y concreto por parte del Juez de control, la imperiosa y precisa necesidad de imponer la prisión preventiva justificada.

«... de los documentos internacionales antes señalados se desprenden varias recomendaciones que deben ser tomadas en consideración por los Jueces de control al momento de imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada en estos tiempos de pandemia, y que resultan de utilidad para que la determinación correspondiente se asuma en un ámbito de irrestricto apego a los derechos humanos del imputado; así pues, si la petición del agente del Ministerio Público resulta adecuada y proporcional, no quedará otro camino más que imponer la medida cautelar prevista en la fracción XIV del artículo 155 del CNPP, reiterando que será la Autoridad Penitenciaria la encargada de promover, respetar, proteger y garantizar, en cada caso en particular, el derecho humano a la salud de las personas privadas de su libertad, haciéndolo a través de las medidas y mecanismos más idóneos para ello».

En otro orden de ideas, de los documentos internacionales antes señalados se desprenden varias recomendaciones que deben ser tomadas en consideración por los Jueces de control al momento de imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada en estos tiempos de pandemia, y que resultan de utilidad para que la determinación correspondiente se asuma en un ámbito de irrestricto apego a los derechos humanos del imputado; así pues, si la petición del agente del Ministerio Público resulta adecuada y proporcional, no quedará otro camino más que imponer la medida cautelar prevista en la fracción XIV del artículo 155 del *Código Nacional de Procedimientos Penales*, reiterando que será la Autoridad Penitenciaria la encargada de promover, respetar, proteger y garantizar, en cada caso en particular, el derecho humano a la salud de las personas privadas de su libertad, haciéndolo a través de las medidas y mecanismos más idóneos para ello.

Fuentes consultadas

Legislación Nacional

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Código Nacional de Procedimientos Penales.

Ley Nacional de Ejecución Penal.

Referencias Electrónicas

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Pandemia y Derechos humanos de las Américas, Resolución 1/2020*, CIDH-OEA, Abril 2020, disponible en: [<https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf>], consultada en: 2020-07-23.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20*, Costa Rica 2020, disponible en [http://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/comunicado/declaracion_1_20_ESP.pdf], consultada en: 2020-07-23.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, *COVID-19: cronología de la actuación de la OMS*, disponible en: [<https://www.who.int/es/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19>], consultada en: 2020-07-23.

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Información disponible en [https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Acuerdo_39_14.pdf], consultada en: 2020-07-23.

SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA PENITENCIARIO, *Gobierno de México contiene contagios de COVID-19 en Centros Penitenciarios con acciones coordinadas*, Julio 2020, México

2020, disponible en: [<https://penitenciario.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/gobierno-de-la-cdmx-contiene-contagios-de-covid-19-en-centros-penitenciarios-con-acciones-coordinadas>], consultada en: 2020-07-23.

YOUTUBE, información disponible en: [https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=5oTP8QSZGEI&feature=emb_logo], consultada en: 2020-07-23.